

Criterios argumentativos e interpretativos emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ante la demanda de nulidad de elecciones: análisis antes, durante y después del proceso electoral 2015 desarrollado conforme a la reforma política del 2014.

ENRIQUE JOSÉ CHAIRES VELASCO^{1 2}

RESUMEN

La reforma política electoral publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, dejó abiertas nuevas herramientas para decretar la nulidad de las elecciones ya sea federales o locales. Así, el artículo 41 constitucional establece de manera particular causas de nulidad por exceder el tope de gastos de campaña, comprar o adquirir espacios en radio y televisión, así como usar recursos de procedencia ilícita; siempre que se acrediten de manera objetiva, material y determinante esas faltas.

La citada reforma debuta en el proceso electoral intermedio de 2015, abre la puerta para buscar desde otra perspectiva la posible nulidad de una elección; de esta forma, y con el nuevo proceso de fiscalización diseñado se analiza en tres piezas lo que ha sido el proceso de nulidad de elecciones en la justicia electoral mexicana, es decir, se explora primeramente los fundamentos y criterios argumentativos e interpretativos emitidos al resolver sobre la nulidad de elecciones demandadas anteriores a éste nuevo mecanismo de impugnación, en segundo punto se examina de la misma forma las impugnaciones recaídas durante el proceso en curso y el papel desarrollado por la sala especializada para acreditar una posible causa de nulidad, finalmente se razona y evalúa el camino rumbo a la elección presidencial del año 2018, quedando abierta la discusión para la posibilidad de una probable nulidad de elección de ejecutivo federal habiendo analizado las nulidades electorales ya resueltas y que servirán como precedentes.

PALABRAS CLAVE

Nulidad de elección, Juicio de Revisión Constitucional Electoral, Causal de nulidad.

¹ Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima; estudiante de la Maestría en Derecho en la misma universidad; estudiante de la Especialidad en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; adscrito a la Universidad de Colima con cargo administrativo. Correo electrónico: enrique_chaires@ucol.mx

² La presente investigación responde a un tema de mayor amplitud, por ahora se contribuye con el citado avance, los tiempos de resolución electorales por el TEPJF siguen aún en acción, por tanto el trabajo a la fecha de socialización no incluye el estudio de fondo de otras sentencias, algunas ya dictadas como Baja California Sur y Campeche.

1.- INTRODUCCIÓN

El sistema judicial electoral mexicano ha cobrado gran relevancia con el paso de los procesos electorales, incrementando de manera efectiva su participación como organismo garante de la legalidad y constitucionalidad de los actos electorales, especialmente, tutelando los derechos político electorales del ciudadano en las vertientes activa y pasiva.

La confianza depositada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) propicia un sistema democrático de calidad, el incremento de sus actividad es un reflejo de la confianza en dicha autoridad, incluso se habla de lo que algunos autores coinciden en llamar *judicialización de las elecciones*, no obstante ello, es adecuado verlo como una herramienta consolidada en virtud de la certeza y confianza demostrada a lo largo de su ejercicio. La actual integración así lo ha demostrado en sus sentencias, es firme y robusto con sus decisiones, ejemplo de ello es la determinación respecto a la protección de la paridad de género, la seguridad de las elecciones en los pueblos indígenas, así como decisiones en materia de comunicación y libertad de expresión, procurando siempre seguir la línea de los derechos humanos, tan es así, que su sistema ha sido novedoso de acuerdo a nuevo modelo de control de convencionalidad.

La evolución sobre la que ha caminado el TEPJF desde su adherencia al Poder Judicial le ha permitido concretar nuevas atribuciones, como es el caso de la reforma política electoral materializada en el año 2014, a partir de la cual se integró un sistema de nulidades basado en la procedencia de recursos de procedencia ilícita y rebase de topes de gastos de campaña; dictámenes sobre los cuales el TEPJF resuelve las inconformidades conducentes y que servirán de sustento legal para resolver los juicios incoados tendientes a nulificar elecciones.

De esta forma, a lo largo de las líneas del presente ensayo se pretende señalar con puntualidad el trabajo del Tribunal Electoral en la nulidad de elecciones identificando aspectos fundamentales como las violaciones invocadas, el sentido de la resolución, así como la diferencia de la votación entre los principales representantes y aspectos que se constituyen como fundamentales para orientar el sentido de las determinaciones. Para esto, el trabajo se divide en cuatro rubros fundamentales. Primero, se establece un contexto y análisis histórico por el que se observa las principales reformas que han marcado las labores atinentes de la autoridad judicial, así como su constante incremento de atribuciones a través de los recursos y modificaciones constitucionales. Segundo, se realiza una descripción de asuntos emblemáticos resueltos en los que se ha impugnado la nulidad de elección, señalando con precisión las razones y argumentos que llevaron a resolver la procedencia o no del recurso interpuesto, tomando en consideración casos resueltos en elecciones celebradas con antelación a la reforma electoral de 2014. Tercero, a partir de las nuevas causales de nulidad se hace mención de asuntos relevantes resueltos por el órgano judicial electoral sobre expedientes en los que se suma entre otras las nuevas causas de nulidad señaladas en la ley, analizando los criterios interpretativos y argumentos vertidos por la autoridad para estimar fundadas o no las pretensiones. Cuarto, en la última etapa del documento se hace un análisis general de los argumentos e interpretaciones que el tribunal ha vertido a lo largo de las sentencias impugnadas, analizando a manera de corolario las que se pronunciaron por la nulidad de elección, en las que se declaró improcedente dicha

petición, para de esta forma estudiar los argumentos y fundamentos esgrimidos, la evolución que han manifestado en diversos asuntos, así como los nuevos modelos aplicados por motivo de recursos de procedencia ilícita y rebase de topes de gastos de campaña.

Con todo esto, se concluirá finalmente en algunos puntos a manera de conclusión un esbozo de lo que han sido los criterios de interpretación y argumentos vertidos por el TEPJF en sus sentencias para desestimar o anular elecciones, con dicho ejercicio se plantea el caso hipotético de nulidad de elección de presidente de la república a celebrarse en el año 2018 y un virtual escenario que desencadenaría dichas circunstancias nunca suscitada pero que con el avance de los medios de acceso a la justicia lo hacen cada vez menos lejano.

2.- CONTEXTO HISTÓRICO

La historia del Tribunal Electoral en nuestro país como organismo encargado de resolver los conflictos suscitados de los actos electorales, así como encargado de tutelar los derechos políticos del ciudadano a votar y ser votado constituyen por sí sólo un tema interesante, no solo por las constantes reformas y adiciones constitucionales que le han permitido concretarse como una autoridad eficiente. Si no que se remonta en sí mismo a la historia de nuestro sistema político electoral, es decir, plagado en desconfianza ciudadana en contra de los actores políticos y por algún pasaje de su vida ha permitido que las elecciones estuvieran en manos del gobierno como lo fue con los colegios electorales y la calificación de las elecciones realizada por el poder legislativo, acrecentando esa falta de fiabilidad del electorado.

En este sentido el tribunal ha crecido conforme a tres etapas fundamentales, primeramente vio la luz para el año de 1987 con lo que fue el Tribunal de lo Contencioso Electoral, conocido por sus siglas como TRICOEL, bajo esta nomenclatura funcionó hasta el año de 1990. Entró en funciones a partir del Código Federal Electoral de ese mismo año, en el cuál se establecía su funcionamiento y organización, algunas de sus facultades fueron las de resolver los recursos invocados por algunas de las partes en el proceso. Los antecedentes de este organismo son muy importantes porque no obstante ser un ente con dependencia directa del ejecutivo pretendió ir separando a los actores involucrados, pero desafortunadamente y en palabras del Barquín Álvarez “sus resoluciones sólo pueden ser modificadas por la Cámara de Diputados actuando en carácter Colegio Electoral”. (p. 196)

Dicha legislación publicada el 12 de febrero de 1987 en el Diario Oficial de la Federación contemplaba las primeras tareas al tribunal en el libro séptimo titulado de los recursos, nulidades y sanciones, como ejemplo resolver los recursos de queja y apelación.

A partir del artículo 352 de manera puntual se habla del TRICOEL como “organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de plena autonomía, para resolver los recursos de apelación y queja” (artículo 352, Código Federal Electoral, 1987), hasta ese entonces con las funciones especiales las cuales se han ido extendiendo con el paso de los procesos legislativos.

Para el año de 1990 se gesta y moderniza el sistema electoral mexicano, siendo una de las reformas por las cuales se ha identificado más a nuestro país, debido al hecho de que se concretaron a partir de dicho año dos entes fundamentales y que hasta este momento siguen operando. En un primer término el Instituto Federal Electoral (IFE) se materializará como encargado de coordinar los comicios y contar los votos, el cual hasta la fecha sigue vigente no obstante la reforma política de 2014 por la que se cambia su estructura para formarse como Instituto Nacional, pero, como sabemos adquirió no solo parte de su aparato laboral sino, la mayoría de sus atribuciones y funciones, mismas que debido a su trascendencia podrían ser objeto de un campo de estudio particular.

Otro de los hechos relevantes de esta etapa fue sin lugar a dudas la materialización del Tribunal Federal Electoral, conocido popularmente como (TRIFE), tal fue su arraigo, que hasta la fecha de forma incorrecta muchos ciudadanos le siguen conociendo por esas siglas, no por su concepción actual como órgano perteneciente al Poder Judicial de la Federación, pudiendo conocerse o citarse como simplemente Tribunal Electoral (TE). Tanto el TRIFE como el IFE acompañaron sus funciones gracias al sustento legal otorgado por el Código Federal de Instituciones Electorales (COFIPE) que como señala Covarrubias (2010)

la legislación electoral se fue desarrollando hasta agrupar; dentro de ese incremento normativo cuantitativo y en calidad, *in crescendo*, el fondo de la materia, la forma, los organismos que debían organizar y calificar el proceso; las infracciones, faltas, sanciones; las nulidades y hasta un Tribunal, todo ello dentro de la misma legislación (p. 37).

Para el año de 1996 se concretó una de las reformas constitucionales más importantes en materia electoral, la autoridad jurisdiccional electoral evoluciona y se nombra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con lo cual se fue dibujando un nuevo proceso de transparencia y consolidación jurídica electoral, Andrade Sánchez (1997) señala conforme al artículo 99 constitucional una de sus atribuciones más destacadas al señalar que

el Tribunal Electoral tendrá facultades para resolver en forma definitiva e inatacable sobre las impugnaciones que se presenten en contra de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales serán resueltas en única instancia por la Sala Superior: En la misma fracción se establece una función no jurisdiccional del tribunal, ya que no consiste en resolver ninguna impugnación o conflicto electoral, sino en realizar el cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieran interpuesto. (pp. 213-214)

A partir de esta fecha el TE ha sufrido una serie de cambios legales en virtud de las constantes reformas constitucionales presentadas, el objeto de la investigación se centra precisamente en dejar en claro esas etapas, para así, indicar algunos de los casos emblemáticos en materia de nulidades, pero es importante no obviar el contexto histórico por dos sentidos, uno para estar momentáneamente ubicados en la forma como se comportó el sistema electoral y sus dificultades para inconformarse de un resultado; segundo, poder

observar el avance presentado a lo largo de casi 20 años del TEPJF y cómo con sus argumentos y fundamentos legales es capaz de tutelar la legalidad de las elecciones y declarar en su caso la nulidad de un proceso.

Parte de esa evolución se observa con la reforma constitucional recaída en materia de derechos humanos y el nuevo control de convencionalidad se sigue a la vanguardia de proteger los derechos humanos integrados en la constitución así como de los tratados internacionales. Bustillo Marín (2014) define precisamente al control de convencionalidad como “mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de autoridades del Estado, se ajustan a las normas, los principios y obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) principalmente” (p. 13). Estos conceptos de convencionalidad nos llevan a interpretar las normas utilizando los criterios que resulten más adecuados, favorezcan mayormente a las personas y sobre todo que sean más adecuados al caso concreto, como puede ser en caso de contraposición de derechos fundamentales, tal es el caso que ha ocurrido ya en algunos expedientes electorales, por citar ejemplos en hechos de libertad de expresión. Así también, se coadyuva la interpretación electoral con los criterios gramatical, sistemático y funcional observados por la ley de medios de impugnación.

Santiago Nieto (2005) indica que “para entender el proceso de surgimiento del derecho electoral y posteriormente el cambio de modelos de interpretación de las normas electorales, es preciso ubicar el proceso histórico de la transición democrática y su impacto en la normatividad electoral” (p.30). Entonces vemos una rama electoral con muchas peculiaridades que la constituyen como una de las vertientes del derecho de mayor crecimiento y evolución, pero sobre todo de enorme especialización.

3.- ANTECEDENTES DE NULIDADES

Hablar de los casos particulares en los que se ha decretado la nulidad de una elección es un tema que incita a un estudio mayor, a partir del cual se puedan extraer los contenidos de cada uno de los argumentos vertidos por las partes inconformes y los criterios determinados por el TE para decretar la procedencia o improcedencia del recurso interpuesto. Este ejercicio brinda las herramientas necesarias para identificar cuáles han sido las causas invocadas con mayor regularidad, los medios probatorios presentados y la relación existente entre estos, los tipos legales y las acciones aducidas por los inconformes, así podemos determinar la evolución y como es que se resuelve cada caso, los principios violados y mecanismos señalados como inoperantes y fundados.

Referir cada caso concreto en extenso impediría ajustarse al objetivo de este texto, que es identificar los aspectos torales de los asuntos y sus resoluciones, para tener como ejercicio de consulta para demandas futuras, sin obviar la relevancia que representa estudiar los asuntos concretos, se trata de precedentes de los cuales se ha derivado jurisprudencia y criterios orientadores.

De esta forma se reflexiona de manera breve sobre cada caso y se resume en los cuadros didácticos las violaciones reclamadas dentro del proceso electoral y hechas valer en la demanda; la votación de los partidos resultantes de primer y segundo lugar en la contienda, así como la diferencia de votos entre ellos; el sentido de la resolución y por último la forma en que voto el pleno, para poder entender la complejidad, las diferencias o bien la uniformidad del criterio en algunos de los casos. Es importante aclarar que los ejercicios expresados corresponden todos a competencia de la sala superior del TEPJF.

3.1.-ELECCIÓN DE GOBERNADOR DE TABASCO: 2000 SUP-JRC-487/2000 Y SU ACUMULADO SUP-JRC-489/2000

La sentencia recaída en la elección de ejecutivo en el estado de Tabasco representa un ícono de la justicia electoral, se trata de la primera determinación dictada por la justicia electoral en la que se resolvía declarar la nulidad de una elección de esa importancia y convocar a un nuevo proceso electoral. Fue un punto de referencia tanto para los juzgadores como para todos los actores jurídicos involucrados, pues es la sanción más severa en el sistema democrático mexicano.

Como precedente resulta muy importante, han pasado tan solo 15 años de su dictamen y en esa diferencia de tiempo los recursos, la jurisprudencia y el perfeccionamiento de la materia electoral se ha ido mejorando. Dentro de este recurso se aducía ente otras cosas como agravios de la parte inconforme los siguientes: el indebido y nulo estudio de las causas de nulidad respecto a la votación recibida en casilla, se inconforman de que no se realizó un adecuado estudio o trabajo argumentativo dentro de la sentencia impugnada; la violación a principios constitucionales como la exhaustividad, congruencia, legalidad, supremacía constitucional; el derecho al voto libre, secreto, directo, personal y universal; falta de equidad en la contienda electoral; violación al principio de derecho a la información, reclamando la falta de distribución de espacios en medios de comunicación, por lo que al mismo tiempo se producen actividades desproporcionales entre la difusión de candidatos a través de medios de comunicación; reclaman la utilización de recursos públicos a favor de candidatos del mismo partido que el titular del gobierno del estado; compra y coacción de voto; cierre de casillas fuera del horario establecido en la ley sin mediar causa justificada; apertura de paquetes electorales; instalación de casillas en lugares no establecidos.

De manera general las alegaciones fueron en el sentido citado, n obstante de resumirse en unos cuantos párrafos nos interesa enfocarnos en dos cosas, 1) colocar especial atención a las pruebas presentadas por la parte demandante, analizando el valor probatorio que ha sido otorgado por la autoridad a cada uno de ellas. Y 2) revisar los argumentos de los juzgadores para determinar cómo esas pruebas llegan a acreditar violaciones constitucionales y legales suficientes para emitir un fallo a favor de determinar la nulidad de la elección.

La sentencia detalló cuáles eran las causas posibles para determinar la nulidad de una elección, en primer lugar la constitución local, misma que establece los principios básicos del voto, de la elección y de las autoridades administrativas y judiciales involucradas. Entre ellos se encuentra el voto libre, secreto, directo tener elecciones libres, y que las mismas se

ejercieran respetando los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad, certeza e independencia.

En la resolución que nos atañe fueron estos últimos criterios los que establecieron los jueces como trascendentes para anular la elección, es decir la violación manifiesta de violaciones a principios constitucionales que fueron acreditándose con los actos ocurridos durante la elección y documentados por la actora. Orozco Henríquez (2011) en este sentido manifiesta que

[...] como resultado del sentido y consecuencias de la sentencia que decretó la nulidad de la elección de gobernador de Tabasco, la Sala Superior del Tribunal Electoral envió un mensaje claro a los actores políticos y a las autoridades electorales y gubernamentales, del carácter normativo que tienen los principios constitucionales que rigen los procedimientos electorales y el deber de que éstos sean puntualmente observados para arribar a resultados electorales válidos y legítimos, a fin de actualizar los postulados de un Estado constitucional democrático de derecho.(p. 21)

La sala superior entre sus argumentos menciona

[...] en el terreno político, el elector debe quedar libre de ciertas formas explícitas de coacción: Las libertades elementales consisten en que su voto no se vea influido por intimidación ni soborno, es decir, que no reciba castigo ni recompensa por su voto individual, aparte de las consecuencias públicas, que emita su voto en el escenario antes mencionado, garantizado por sus libertades públicas, que lo haga con pleno conocimiento de las propuestas políticas derivado de una equitativa posibilidad de difusión de las propuestas de los partidos políticos.

Estas son las condiciones que debe tener una elección, que tienden a cumplir con el principio fundamental de que los poderes públicos se renueven a través del sufragio universal, tal como lo establece la Constitución Federal; que se cumpla con la voluntad pública de constituirse y seguir siendo un Estado democrático, representativo, en donde la legitimidad de los que integran los poderes públicos, derive de la propia intención ciudadana.

Una elección sin estas condiciones, en la que en sus etapas concurren intimidaciones, prohibiciones, vetos, iniquidades, desinformación, violencia; en donde no estén garantizadas las libertades públicas ni los elementos indicados, no es, ni representa la voluntad ciudadana, no puede ser basamento del Estado democrático que como condición estableció el constituyente, no legitima a los favorecidos, ni justifica una correcta renovación de poderes. (SUP-JRC- 487/2000 y su acumulado, 200:581-582)

Para los hechos argumentados nos importa tener de manifiesto que hasta este momento como criterio decisivo en el TE era el contar con violación clara a principios constitucionales, punto principal es tutelar las libertades públicas del ciudadano

consagradas en la ley, evitando a toda costa actos ilegales los cuales originaran procesos electorales alejados de la ley. Las maniobras electorales desarrolladas por los actores políticos, candidatos y partidos se encuentran al margen de un marco normativo que se ha ido perfeccionando. En el presente asunto al que se hace mención observamos como juega un papel importante ya la inequidad en la contienda, la violencia y los problemas de votación en casillas, pero es importante no perder de vista que suelen reclamarse una gran cantidad de actos, esperando obtener nuevos criterios de la autoridad, algunos han resultado inoperantes, pero otros, actos impugnativos derivan en jurisprudencia y en un mejoramiento de la ley, fruto de ello las reformas producidas después de cada proceso electoral.

CUADRO 1.
DATOS RELEVANTES SOBRE LA NULIDAD DEL CASO TABASCO.

Violaciones graves en el proceso electoral: <ul style="list-style-type: none"> • Cómputo • Inequidad en acceso a medios de comunicación. • Apertura de paquetes electorales. • Compra y coacción del voto. 			
Votos del partido ganador: PRI: 298,969	Votos del partido en segunda posición: PRD: 290,968	Diferencia de votos entre el candidato de primera y el de segunda posición: 8001	Resolución: Declara nulidad de elección
Votación: Por mayoría de 4 votos a favor, con el voto en contra de los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. El Magistrado Fernando Ojesto Martínez Porcayo presentó excusa			

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de la sentencia SUP-JRC-487/2000 y su acumulado SUP-JRC-489/2000.

3.2.- ELECCIÓN DE GOBERNADOR DE COLIMA: 2003 SUP-JRC-221/2003 Y ACUMULADOS

La nulidad de elección de Colima es un caso muy importante para la historia de la justicia electoral de nuestro país, no se trata solamente de ser a segunda sentencia en la que se anula la elección de un poder ejecutivo, el detalle importante es la causa: la intervención indebida del gobernador del Estado en el proceso electoral. Se acompaña de una serie de argumentos y hechos capaces de materializar la violación constitucional y legal, misma que repercute en empañar todo el marco normativo, sin alejarnos ni perder de vista en ello la diferencia que existió entre el candidato ganador y el de segundo lugar. Ese dato es fundamental, incluso ahí a lo largo de la sentencia se precisa la diferencia en un 7%, es decir un porcentaje si bien no amplio, si necesario para llegar a la convicción de tener un ejercicio democrático definido por un candidato ganador, nuestro sistema se gana por votos, sea uno

o más, pero esa mayoría de votos así sea la mínima tiene que ser inobjetable, producto de un proceso constitucional y legal.

En esta sentencia, salen a relieve la argumentación sistemática y funcional, también como se alega la indebida interpretación de artículos de la ley por el *a quo*, ahora nos parece cotidiano escuchar que las leyes electorales tendrán que atenderse de acuerdo a los criterios gramatical, sistemático y funcional, sin omitir la importancia de la determinancia. Así resumida cuenta la sala superior argumenta:

[...] la elección de "Gobernador del Estado de Colima", derivan de la interpretación sistemática y funcional de las disposiciones constitucional y legales señaladas. Para esta Sala Superior no es inadvertido el hecho de que en el artículo 59, fracción V, de la Constitución del Estado, únicamente se hace referencia al sujeto activo, el cual es propio o exclusivo (Gobernador del Estado de Colima); la conducta prohibida (intervención en la elección para que recaiga en cierta persona); las formas de comisión de la conducta (por sí o por medio de otras autoridades o agentes); el objeto directo en que recae la conducta (la elección para que recaiga en cierta persona), y la sanción conjuntiva (una invalidante, que es la nulidad de la elección, y, la otra, punitiva o represiva, la cual consiste en una causa de responsabilidad).

[...] estar **plenamente acreditados**, se trata de un elemento o condicionante cuya presencia es necesaria si se atiende a los principios constitucionales de certeza, objetividad y legalidad, de tal forma que la afectación de los principios y valores que estén implicados debe ser real, efectiva e indubitable, porque se está en presencia de una irregularidad invalidante que impide reconocer efectos a un proceso electoral que no es democrático, porque, en síntesis, no es expresión de la soberanía popular, a través de elecciones libres, auténticas y periódicas, por medio de voto universal, igual, libre y secreto, bajo condiciones de equidad en la contienda electoral [...] (SUP-JRC-221/2003, 2003:542-543).

La argumentación va más lejos de encuadrar solamente en el tipo legal una infracción, la sala precisó los alcances que podría tener el considerar de esa manera, argumenta conforme a los postulados de la ley y hace la relación existente entre ellos con los actos sucedidos, pero concluyen en la forma de materializar esas mismas conductas violaciones los elementos constitucionales, los cuales hicieron eventualmente necesario anular la elección pues como se señala en líneas superiores se vio lesionada la expresión popular.

Las partes actoras hicieron llegar una serie de elementos integradores muy importantes, base para votar por declarar nula la sentencia del tribunal local y como consecuencia solicitar una nueva elección. Entre dichos elementos materiales y argumentos vertidos por los demandantes figuraron los siguientes: la expresión de indicadores de votación para ese proceso electoral de 2003 en el estado de Colima, se adjuntaron esos datos pero de carácter nacional para mencionar así como el porcentaje de la votación Colima no sólo fue el más bajo a nivel nacional, si no que descendió en relación con las elecciones anteriores sosteniendo de esta forma las constantes manifestaciones y presiones del gobierno, lo que lleva a ese efecto. Anexan una serie de publicaciones impresas en periódicos en los que se

hacen entrevistas y se difunde la información de logros de gobierno. Otra causa fuertemente invocada es la presencia del procurador y la policía judicial ejerciendo presión en el electorado y la práctica de retenes en perjuicio de la ciudadanía que pretendía acudir a votar, provocando temor.

Por si sola la sentencia es muy rica, contiene argumentos relevantes, clasifica las nulidades, como pueden ser estar relevantes de acuerdo a su gravedad explicando

[...]si se está en presencia de una irregularidad leve o no grave, o bien, si la irregularidad, aun de carácter grave, no es de la magnitud o amplitud suficiente para influir en el resultado electoral, no será una irregularidad invalidante y, por tanto, no será susceptible de acarrear la nulidad de una elección (votación), incluso si la diferencia entre los partidos es mínima, así sea de un solo voto, toda vez que debe privilegiarse la expresión de la voluntad popular expresada en las urnas.[...] (SUP-JRC-221/2003, 2003:556).

CUADRO 2.
DATOS RELEVANTES SOBRE LA NULIDAD DEL CASO COLIMA.

Violaciones graves en el proceso electoral:			
<ul style="list-style-type: none"> • Indebida intervención del titular del ejecutivo en la elección. 			
PRI: 83,995	PAN: 69,180	Diferencia de votos entre el candidato de primera y el de segunda posición: 14,815	Resolución: Declara nulidad de elección
Votación: Por mayoría de cuatro votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra de los Magistrados Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y José Luis de la Peza, quienes formularon voto particular			

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de la sentencia SUP-JRC-221/2003 y acumulados.

3.3.- ELECCIÓN DE GOBERNADOR DE VERACRUZ: 2010 **SUP-JRC-244/2010 Y ACUMULADO**

Proponer el comentario respecto de esta sentencia en particular resulta interesante porque reúne entre sus particularidades las siguientes: se trata de una resolución por la cual los magistrados determinan confirmar la validez de la elección. No obstante tenerse por confirmada la resolución de la autoridad local, la sala superior encontró irregularidades durante el proceso electoral, lo interesante entonces es despertar el interés para verificar

cuáles fueron esas irregularidades y cómo fue la lectura realizada por los jueces para llegar al dictamen de no considerarlas suficientes para anular la elección. Un dato relevante es el hecho de la votación obtenida en la cual manifestaron voto particular algunos de los magistrados, documento que engrosa la sentencia y que consta de evidencia importante de estudio.

CUADRO3.

COMPARACIÓN ENTRE CAUSALES DE NULIDAD INVOCADAS POR LA ACTORA Y SEÑALIZACIÓN DE LAS QUE SE LOGRARON ACREDITAR.

Causas invocadas	Irregularidad acreditada	Causas invocadas	Irregularidad acreditada
Dictamen		Debate entre candidatos	Sí
Recursos de procedencia ilícita		Indebida utilización del padrón electoral	Sí
Intervención del Gobernador		Rebase de tope de gastos	
Intromisión del Gobierno del Estado		Irregularidades en jornada electoral	
Propaganda negativa		Robo de papelería electoral	Sí
Inequidad en medios de comunicación	Sí	Violencia el día de la jornada electoral	
Indebida difusión de encuesta posterior a la jornada	Sí		

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de la sentencia SUP-JRC-244/2010 y acumulado.

La anterior clasificación temática fue elaborada por la autoridad judicial, en la sentencia hace un estudio detallado de todos los medios probatorios expresados por los quejosos, de ahí resumen todo en los temas contenidos en la tabla anterior, de esas, sólo cinco fueron calificadas como irregularidades acreditadas. Durante la valoración de las pruebas se determinó que en el caso de grabaciones privadas no pueden tener valor probatorio por ser adquiridas de forma ilegal, para ello la sala ya se había manifestado en recursos anteriores, con lo que el SUP-JRC-244/2010 formó parte de los precedentes que han dado origen a la

jurisprudencia 10/2012 que al rubro señala **GRABACIÓN DE COMUNICACIONES PRIVADAS. CARECE DE VALOR PROBATORIO EN MATERIA ELECTORAL**, declarada obligatoria ahora sustento de varios asuntos en el mismo sentido.

A lo largo de la sentencia indica que los documentos como copias simples presentadas carecen de valor probatorio pleno, simplemente son indicios. En cuanto a las instancias de monitoreo, alega que si bien se encuentran clasificados en los reportes de verificación cierta participación, no es suficiente para tener certeza de que las mismas fueron objeto de actividad directa al proceso electoral.

El contenido importante del resolutivo lo observamos en la manifestación respecto a las acreditaciones de violaciones reclamadas, pero el planteamiento de no ser causa suficiente para llegar a la convicción de que el resultado pudo haber alterado por esos hechos y por tanto producir una condición en el electorado a favor del candidato y partido triunfador. Por ejemplo en el caso de la difusión de medios de comunicación en tiempos legalmente prohibidos (conocidos como veda electoral) a través de una revista en favor de un color en particular se argumenta que si bien se acredita que la emisión de la revista es fuera del tiempo establecido en la ley, esa difusión no resulta determinante por no manifestarse en toda la entidad. Precisa como la distribución sólo abarcó una mínima parte del estado.

Un argumento vertido por la actora y que fue aceptado como violación fue el hurto de material electoral. Acreditado a la extracción de urnas en solamente dos casillas, tomando en cuenta la vigilancia y representación de los partidos políticos quienes hicieron la constancia respectiva. Sin embargo, la transgresión a la disposición legal parece clara, pero los magistrados atinadamente se pronunciaron por interpretar esos actos a la luz del código, para llegar a la conclusión siguiente:

[...] se habían instalado 9,827 (nueve mil ochocientos veintisiete) casillas. De ahí que, la sustracción de boletas electorales en las dos casillas anteriormente referidas, en términos generales representan el 0.02 % (cero punto cero dos por ciento), del universo total de casillas instaladas en la citada entidad federativa, lo cual en modo alguno es determinante para el resultado final de la elección y, mucho menos representa el 25% (veinticinco por ciento) [...] (SUP-JRC-244/2010 y acumulado, 2010:1205).

La interpretación y argumentación vertida en la sentencia al comparar en primer lugar si las conductas descritas como agravios encuadraban en algún supuesto de ley, a partir de ahí se procede a interpretar ese marco legal concreto con el acto ejecutado, analizando las circunstancias conexas, tal es el resultado de la votación y la medida en que la vulneración a la norma se efectúa. Esas consideraciones llevan a la sala a indicar que se trata de actos materializados pero insuficientes para anular la elección, el resultado conjunto de todas las causales acreditadas en nada cambiaría el sentido de la votación emitida, evitando la posibilidad de que el candidato ganador pudiera ser otro, tutelando así el voto ejercido por la mayoría de la población en aras del principio de los actos validamente celebrados.

CUADRO 4.
DATOS RELEVANTES SOBRE LA NULIDAD DEL CASO VERACRUZ.

Violaciones reclamadas: <ul style="list-style-type: none"> • Inequidad en medios de comunicación. • Utilización indebida del padrón electoral. • Robo de material electoral. • Inequidad y certeza. Indebida difusión de encuestas con posterioridad a la jornada electoral. 			
Coalición “Viva Veracruz” (PAN/PANAL): 1,277,151	Coalición “Veracruz para adelante” (PRI/VERDE):1,356,623	Diferencia de votos entre el candidato de primera y el de segunda posición: 79,472	Resolución: Confirma validez de la elección
Votación: Por mayoría de seis votos respecto del resolutivo primero, con el voto particular del Magistrado Flavio Galván Rivera, por mayoría de cinco votos respecto de la procedencia del SUP-JRC-245/2010, con el voto particular de los Magistrados María del Carmen Alanís Figueroa y Flavio Galván Rivera y, por unanimidad de votos, respecto de los resolutivos segundo a sexto, con la reserva y aclaración formuladas por el Magistrado Flavio Galván Rivera			

Fuente: Construcción propia con datos obtenidos de la sentencia SUP-JRC-244/2010 y acumulado.

4.- IMPUGNACIÓN DE ELECCIONES: PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2015

Con fundamento en las reformas recaídas sobre la legislación electoral del año 2014 los involucrados contarán con una nueva área de oportunidad para demandar la nulidad de una elección. Se trata de dos tipos a) rebase de tope de gastos de campaña y b) utilización de dinero ilícito. Anteriormente la fiscalización a los partidos políticos se terminaba hasta un año después de celebrado el proceso electoral, para ese entonces el candidato ya había recibido su constancia y claro, se encontraba en funciones, haciendo obsoleto ese sistema de trabajo. Ahora la ley es diferente, la fiscalización se hizo de momento a momento, eso lleva a emitir dictámenes de topes de gastos en la etapa oportuna para hacer la calificación de las elecciones y en su caso impedir a quien viole la ley no acceder al cargo.

Lo interesante ahora es la forma de acreditar las violaciones, de entrada se supone que el dictamen emitido por la comisión de fiscalización del INE será determinante, en sentido de que al resolver se sabe si existió el rebase de gastos, con el dictamen procedería como consecuencia a acreditarse el supuesto legal y decretarse la nulidad de la elección. El ejercicio resulta interesante partiendo del hecho de comprobarse el rebase, porque se puede presentar varios casos hipotéticos conforme a lo que se ha visto en algunos de los criterios ya analizados, los cuales serán de gran relevancia. Como el hecho de estar frente a una elección completamente inclinada con su votación a un candidato en particular, de entrada supondríamos que se trata de una victoria inobjetable pero ¿qué ocurre si rebaso el ganador los topes de gastos?, lo segundo sería analizar la cantidad excedida y entrar de lleno al

procedimiento de estudio acompañado de un resto de causales que se puedan invocar e incluso acreditar.

4.1.-ELECCIÓN DE DIPUTADO FEDERAL DE AGUASCALIENTES: 2015 SUP-REC-503/2015

La sentencia recaída dentro del expediente conocido por la sala superior por medio del cual conoce la impugnación a la sentencia emitida por la sala regional Monterrey en el expediente identificado como SM-JIN-35/2015 que resuelve anular la elección a diputado federal por el distrito federal electoral 01 del estado de Aguascalientes.

La sentencia resulta controvertida por algunos aspectos particulares sumamente precisos, uno es la nulidad de elección decretada por la intervención del gobernador del estado el día de la jornada electoral, la otra es la valoración de las pruebas realizadas en una primera instancia por la sala regional y posteriormente si bien no compartidas pero si aceptadas por la sala superior, tercero la discrepancia de criterio existente en esta resolución en relación con las analizadas en líneas superiores, un último punto es que se tiene que someter a votación de calidad por parte del magistrado presidente en virtud del empate presentada y de la inobservancia de la cámara del congreso encargada de nombrar al Magistrado Electoral faltante para integrar el pleno, dejando vacante a dicho órgano en una etapa importante de su actuar.

La sentencia en comento declara la nulidad de la elección por la participación del gobernador el día de la jornada electoral con actos que violaron los principios constitucionales de imparcialidad y equidad en la contienda. Los hechos ocurridos radican en el tenor siguiente:

- a) El día de la jornada electoral el gobernador del estado acude a votar en compañía de miembros de su equipo de trabajo (gabinete), legisladores en funciones y candidatos de los distritos federales electorales de esa entidad federativa.
- b) Acudir a casillas que no pertenecían a la del gobernador, con el argumento de acompañar al resto de ciudadanos a emitir el sufragio lo hicieron a bordo del autobús perteneciente al gobierno del estado, se encuentra rotulado con frases alusivas a ese gobierno y se sabe es utilizado por el ejecutivo para acudir a sus eventos.
- c) El titular del ejecutivo es grabado y fotografiado acudiendo a una de esas casillas.
- d) El mismo gobernador toma foto de lo que se supone es su boleta electoral con la marca a favor de su partido político (el revolucionario institucional).

Con base en estos hechos se presentaron como pruebas dos videos, fotografías tomadas de manera directa a los personajes involucrados y donde se les reconoce con facilidad, así como capturas de la red social *twitter* en la que se identifican los comentarios del ejecutivo a favor o en simpatía de los candidatos de su partido.

La discusión parte de esos hechos y la sala superior entra al análisis del valor dado a las pruebas por la sala regional, indicando que se tratan de pruebas técnicas y que por sí solas no son suficientes para acreditar los hechos alegados en ellas (propiamente los videos). pero En su estudio la sala superior señala, a pesar de no encontrarse correctamente valoradas las pruebas por la autoridad inferior en su conjunto llegan a identificar que precisamente se trata de actos que violaron principios constitucionales. La sala regional valoró que fueron hechos notorios y generalizados debido a la difusión hecha por noticieros de la presencia del gobernador en las casillas que no eran las suyas, todo por información coincidente no obstante tratarse de fuentes diversas. Un hecho fuerte para la sala regional y superior es el rol desempeñado por la red social en mención, los comentarios ahí emitidos se filtraron en la ventana que esa red social despliega en la página de internet del gobierno del estado, destino utilizado para información y apoyo de los programas gubernamentales, no para difundir preferencias partidistas. En la argumentación de la sentencia de la sala Monterrey cita que esa distribución de *twetts* en la página web del gobierno le otorgan valor a esa prueba, pues se adminicula con ese elemento para considerarla generalizada por contar con una gran cantidad de seguidores el gobernador en las redes sociales, hecho que situaría una incongruencia con lo ya resuelto por el tribunal electoral en materia de redes sociales y propaganda como medio de comunicación.

Es importante destacar como en este asunto convergen dos cosas: la deficiente valoración probatoria, y segundo, la contradicción de criterios en cuanto a los conceptos de determinancia y conservación de los actos válidamente celebrados. Toda vez que del estudio completo de la sentencia se observa como en los casos citados en este mismo ensayo no obstante encontrarse irregularidades acreditadas se resolvió que no eran suficientes, bastantes y determinantes para el resultad de la votación, y ahora en esta cita al valorar pruebas de manera errónea se determina que si son lo suficientemente robustas para tener el criterio de decidir anular la elección. Para ello basta analizar los votos particulares y observar como se aprecia el concepto de determinancia en algunos de sus aspectos.

CONCLUSIÓN

Primera: El avance de la justicia electoral se debe a la confianza ciudadana en la autoridad judicial electoral como garante de la democracia, debido a la fuerza de sus sentencias, pero al mismo tiempo a la falta de credibilidad en las determinaciones de las autoridades locales encargadas de resolver los comicios. De ahí la necesidad de capacitar y profesionalizar a estas instituciones.

Segunda: Al paso de las elecciones el estudio de las elecciones se ha hecho más robusto, los abogados electorales son especialistas en la materia, lo cual reditúa en el avance de los litigios de la materia y más sólidos.

Tercera: Los criterios emitidos en la nulidad de elecciones y el ahora emitido por la sala superior en la elección de Diputado Federal de Aguascalientes ha dado un giro, evidencia cambios de criterio, comparado con los casos expresados con anterioridad, ese hecho abre

la posibilidad de buscar un cambio y lograr nulificar una posible elección de presidente de la república, aunque es claro que las pruebas tendrán que ser sumamente contundentes para dejar de privilegiar la validación de los actos celebrados y la voluntad del pueblo al ejercer su voto. No obstante las estrategias para mantener el poder siempre se utilizan disfrazadas.

Cuarta: Los mecanismos de interpretación y argumentación hechos valer por los magistrados electorales responden a muchas exigencias, pero siempre pueden cambiar como se ha demostrado.

Quinta: Es necesario mejorar la argumentación y fundamentación por parte de los abogados litigantes para enriquecer el debate en tribunales, por ello la intención del documento presentado es mostrar la diferencia de casos, si bien las causales parecen repetirse los hechos, actos y contextos no son los mismos. Muchos abogados intentan replicar los conceptos de agravios que en algunos asuntos les han funcionado para tener por acreditado algunos agravios y ganar algunos asuntos. Evitando un litigio de calidad y profesional, sin embargo se busca en repetidas ocasiones la misma opción que es la intromisión de funcionarios públicos, pero técnica argumentativa y probatoria resulta deficiente en muchas de las ocasiones.

Sexta: Nos quedamos cortos en la exposición de los asuntos relevantes, estudiar su contenido a detalle de forma comparada requiere de un examen profundo, no obstante ya se cuentan con estudios que critican las sentencias. El objeto es destacar la diferencia y contraste entre unos y otros dependiendo la sala que la integra, los magistrados que las proponen y los votos emitidos a lo largo de su trayectoria.

BIBLIOGRAFÍA

Andrade Sánchez, Eduardo. (1997) *Cuadernos Constitucionales México-Centroamérica 25. La reforma política de 1996 en México*. Universidad Nacional Autónoma de México. México.

Barquín Álvarez, Manuel. (2002). *La renovación política de 1986-1987 y la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral*. En: *Evolución Histórica de las Instituciones de la Justicia Electoral en México*. (p.196). México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Bustillo Marín, Roselia. (2014). *El control de convencionalidad en el derecho electoral: los principios rectores para su efectiva aplicación*. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México.

Código Federal Electoral. 1987.

Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4638888&fecha=12/02/1987

Covarrubias Dueñas, José de Jesús. (2010). *Derecho Constitucional Electoral*. Porrúa. México.

Nieto Castillo, Santiago. (2005). *Interpretación y argumentación jurídicas en materia electoral*. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. México.

Orozco Henríquez, José de Jesús. (2011). *Causas de nulidad de elección: el caso Tabasco*. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación. México.

SUP-JRC-487/2000 y su acumulado SUP-JRC-489/2000. Actor: Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. Autoridad responsable: Tribunal Electoral de Tabasco. Disponible en: http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/doc-relacionado/Comentario_39_SUP-JRC-487-2000-1_4.pdf

SUP-JRC-221/2003 y acumulados. Actor: Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario Institucional. Autoridad responsable: Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Disponible en: <http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00221-2003.htm>

SUP-JRC-244/2010 y acumulado. Actor: Coalición “Para cambiar Veracruz” y Partido Acción Nacional. Autoridad Responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SUP- REC-503/2015. Actor: Partido Revolucionario Institucional. Autoridad Responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León.